

Monitor
Deloitte.

Infraestructura con propósito

El nuevo motor del desarrollo
latinoamericano



INTRODUCCIÓN

Latinoamérica enfrenta una brecha de inversión en infraestructura, lo que limita su potencial de desarrollo social y económico. La infraestructura tradicional —carreteras, puentes, energía, agua, telecomunicaciones— es la columna vertebral de las economías modernas; sin embargo, no basta con construir lo que históricamente se ha construido.

El concepto de “Infraestructura con Propósito”, o *“Infrastructure for Good”*, enfatiza proyectos diseñados para generar impactos positivos en lo social y medioambiental,

alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto implica infraestructura sostenible, inclusiva y resiliente al clima, más allá de la definición tradicional de obra pública, diseñando modelos de gobernanza adecuados para su implementación.

Diversos organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han definido la infraestructura sostenible como aquella que integra criterios económicos, ambientales, sociales e institucionales en todas sus fases.¹ Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) define los pilares que debe incorporar la infraestructura socialmente inclusiva, que sea equitativa, asequible, accesible, no hacer daño y que

sirva de plataforma para empoderar a la sociedad.² Esto sienta las bases para encaminar la estructuración de proyectos que sean financieramente viables, ambientalmente responsables, socialmente incluyentes y con buena gobernanza.

Por ejemplo, una carretera *“for Good”*, además de conectar dos puntos, maximiza beneficios comunitarios como empleo local y acceso a servicios, minimiza impacto ecológico con un trazado que respeta ecosistemas y se construye con transparencia. Esta visión contrasta con infraestructura convencional que, históricamente, era viable mediante una óptica de costo/beneficio, pero que ahora, bajo una nueva realidad, requiere de un análisis más integral en el que los aspectos sociales, socioambientales y de resiliencia, cobran un rol fundamental.

Según el Foro Económico Mundial, históricamente Latinoamérica invierte cada año entre 2.5% y 3% del PIB en infraestructura, por debajo de 5% recomendado a nivel global. En comparación, las economías avanzadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) invierten cerca de 4% y, países de Asia en desarrollo, hasta 7% del PIB en infraestructura.³ La consecuencia es un déficit acumulado: millones de personas sin acceso a transporte seguro, agua potable, saneamiento o conectividad digital. De mantenerse el ritmo actual, Latinoamérica tardaría décadas en equiparar su infraestructura a estándares internacionales.

Sin embargo, la región tiene la oportunidad de transformar su futuro a través de infraestructura con propósito.

Latinoamérica cuenta con abundantes recursos naturales para energías limpias, una población joven que demanda conectividad, y ciudades en crecimiento donde se pueden replantear modelos urbanos sostenibles. El impulso hacia infraestructura *“for Good”* no solo cerraría brechas físicas, sino que catalizaría el crecimiento inclusivo y la resiliencia climática.

El tema ha cobrado relevancia en círculos globales. Por ejemplo, el índice regional de infraestructura sostenible desarrollado con apoyo de The Economist, la Universidad de Duke y Deloitte ha generado notable interés.⁴ Este estudio comparó indicadores por país —desde acceso a servicios, preparación ante desastres, hasta marcos regulatorios verdes— poniendo en evidencia liderazgo y rezagos. Países como Chile y Colombia destacaron en ciertos pilares, mientras que otros evidenciaron la urgencia de mejoras en resiliencia o transparencia. Dichos indicadores han alimentado la conversación pública, creando sentido de urgencia por acelerar la transición hacia modelos *“for Good”*. En pocas palabras, existe ya un consenso emergente: la infraestructura sostenible y resiliente es el motor clave del desarrollo regional y social que Latinoamérica no puede darse el lujo de ignorar.

PANORAMA Y TENDENCIAS: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?

Latinoamérica se encuentra en un momento clave en materia de infraestructura.

Después de décadas en las que la inversión era insuficiente y el mantenimiento se postergaba, hoy muchos sistemas están al límite de su capacidad y con un desgaste que afecta su operación: redes eléctricas con apagones, carreteras saturadas, transporte público deficiente y una mayor vulnerabilidad a eventos climáticos. Además, se observa una brecha importante en la disponibilidad y la calidad de servicios públicos a nivel urbano y rural, así como entre regiones de un mismo país, generando inequidad en oportunidades y en calidad de vida.

La buena noticia es que los gobiernos y el sector privado reconocen cada vez más la necesidad de cambiar el rumbo hacia una infraestructura sostenible. Si nos preguntamos dónde estamos, la respuesta encuentra lugar en el rezago de cantidad y en la calidad de infraestructura; no

obstante, distintos países han desarrollado focos de excelencia institucional y proyectos de referencia que marcan la dirección correcta. Y, si la interrogante es hacia dónde vamos, la respuesta es hacia una infraestructura concebida como servicio público con propósito, apalancada en tecnología, financiamiento innovador y participación ciudadana.

A nivel global, existen tendencias que impulsan el cambio y que están actuando como *drivers* para que Latinoamérica acelere la adopción de *Infrastructure for Good*: transición energética y descarbonización, urbanización y movilidad sostenible, digitalización e infraestructura digital, cambio climático y resiliencia, aspectos regulatorios y ASG, así como innovación tecnológica (*InfraTech*). A continuación, abordamos brevemente dichas tendencias:





Transición energética y descarbonización: el mundo avanza hacia energías limpias, y Latinoamérica, con su potencial en solar, eólica e hidroenergía, sigue esta tendencia. 2025 fue el primer año en el que las energías renovables superaron al carbón como primera fuente de electricidad en el planeta. Precisamente, a nivel global 81% de la nueva capacidad eléctrica añadida en 2023 fue más barata que combustibles fósiles,⁵ mostrando que la tecnología renovable ya es competitiva. Países como Chile, Brasil y México están instalando parques solares y eólicos récord, reduciendo costos y emisiones. Se trata de una transición que no es solo ambiental, pues también crea empleos verdes y reduce la dependencia de combustibles.

A pesar de estos avances, los proyectos de energías renovables e infraestructura asociada —como las líneas de transmisión— enfrentan retos derivados de marcos normativos poco eficientes en temas como licenciamiento ambiental o consultas con comunidades, los cuales, han ralentizado el desarrollo de los proyectos y la inversión debido a la falta de mecanismos que permitan mitigar/compartir este tipo de riesgos.



Urbanización y movilidad sostenible: Latinoamérica es ya mayoritariamente urbana (~80% de la población vive en ciudades) y seguirá siéndolo. Para 2050, se proyecta que 70% de la población mundial viva en ciudades, y en la región implica megaurbres más densas. Esto impulsa tendencias de movilidad sostenible (Metros, teleféricos urbanos, sistemas de autobuses rápidos, ciclovías) y de infraestructura verde. Las ciudades latinoamericanas, de la mano de redes como C40,⁶ se fijan metas de carbono neutralidad y resiliencia climática, obligando a replantear el transporte (electrificación de flotas y de medios de transporte), la gestión de residuos, el urbanismo con criterios sostenibles e, incluso, la calidad del aire.

Esta última meta se encuentra ligada con la calidad de vida de los habitantes, teniendo un impacto potencial en los costos de salud. De ahí el desarrollo de iniciativas regionales como el Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina (CALAG+), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y enfocado en mejorar la calidad del aire.⁷



Digitalización e infraestructura digital: existe una tendencia significativa para invertir en infraestructura digital: expansión de banda ancha, centros de datos regionales y digitalización de servicios públicos (gobierno digital, telemedicina, educación en línea). La brecha digital es parte de la brecha de infraestructura, pues ahora, conectar a los 'no conectados' es una prioridad "for Good" para habilitar el acceso a educación, mercados y teletrabajo. Por ejemplo, países como Colombia y Costa Rica han lanzado planes para llevar internet de alta velocidad a comunidades apartadas como un derecho básico.



Cambio climático y resiliencia: los eventos climáticos extremos se han vuelto más frecuentes e intensos, impulsando una tendencia de infraestructura resiliente. Esto incluye desde diques, reservorios y defensas costeras, hasta el reforzamiento de edificios e infraestructura crítica, en virtud de posibles desastres naturales. Asimismo, se promueve la infraestructura natural, como manglares para protección costera o restauración de cuencas para regulación hídrica. Un cambio importante respecto al pasado es que los gobiernos están integrando evaluaciones de riesgo climático en la planificación de obras.



Aspectos regulatorios y ASG: tanto a nivel global como a nivel latinoamericano, hay una presión regulatoria y del mercado hacia la integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la infraestructura. Por ejemplo, inversores institucionales solo canalizan ~5% de sus portafolios a infraestructura, pero exigen cada vez más que esos proyectos cumplan estándares de sostenibilidad.⁸ En respuesta, hay países que están actualizando marcos normativos con nuevas leyes y planes nacionales que incorporan metas de reducción de emisiones, eficiencia energética, participación comunitaria y transparencia en proyectos.



Innovación tecnológica (InfraTech): la infraestructura también vive su mini revolución tecnológica. Las tendencias emergentes incluyen *smart infrastructure* (sensores IoT en puentes, carreteras y redes para monitorear en tiempo real su estado), *Big Data* e Inteligencia Artificial (IA) para planificación y mantenimiento predictivo, y construcción con métodos modernos (prefabricación, impresión 3D de elementos, drones para supervisión). Se trata de innovaciones que prometen obras más rápidas, seguras y eficientes, además de prolongar la vida útil de activos mediante mantenimiento inteligente.

El panorama muestra que Latinoamérica reconoce sus brechas, pero también las oportunidades de saltar hacia adelante. Las tendencias tecnológicas, financieras, sociales y ambientales confluyen en un mismo punto: infraestructura más sostenible, resiliente y centrada en el bienestar público. De ahí la importancia que tanto los gobiernos como las empresas abracen estas tendencias con el objetivo de atraer inversión y, además, entregar resultados tangibles a sus ciudadanos con mejores servicios, empleos y calidad de vida.

MODELOS DE NEGOCIO, ESQUEMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para lograr la infraestructura “*for Good*” que Latinoamérica necesita, no basta con aumentar el gasto público tradicional; se requieren modelos de negocio innovadores y esquemas de financiamiento creativos que movilicen a la par tanto el capital público como el privado. Este último es un habilitador transversal y fundamental para lograr los objetivos planteados para el desarrollo, y que a la vez, agilicen su puesta en marcha.

Históricamente, los gobiernos construían infraestructura directamente con presupuesto público, característica que limitaba la velocidad por restricciones inherentes. Hoy, la **asociación público-privada (APP)** se ha consolidado como modelo en diversos países al permitir que inversionistas privados financien, construyan y operen infraestructura —ya sea carreteras, aeropuertos u hospitales— bajo contratos de largo plazo, transfiriendo riesgo del Estado al privado, a cambio de retornos razonables. Países como Colombia y Perú han modernizado sus marcos de APP, incorporando cláusulas de sostenibilidad en los contratos. Las APP bien diseñadas pueden acelerar proyectos y garantizar mantenimiento a lo largo de la vida de la infraestructura, un aspecto crucial para la resiliencia.

Para ampliar el impacto, también se están innovando los **modelos de estructuración contractual y los mecanismos de distribución de riesgos**. Este último aspecto ha sido determinante para asegurar la atractividad y bancabilidad de los proyectos, por lo que se convierte en un elemento clave al definir y asignar los riesgos

y oportunidades ASG. Se han implementado contratos de participación público-privada (PPP) con pagos contra resultados —como los *output-based contracts* que pagan al concesionario por indicadores de disponibilidad o calidad de servicio, más que solo por construir. Esto asegura que el interés del operador se alinee con el bien público a largo plazo. Asimismo, los gobiernos están adoptando mecanismos de garantía y seguros más sofisticados: garantías de ingreso mínimo en proyectos renovables para mitigar riesgo de demanda, seguros contra variabilidad hidrológica en proyectos hidroeléctricos, o coberturas de tipo de cambio cuando los financiamientos son en dólares, pero los ingresos en moneda local.

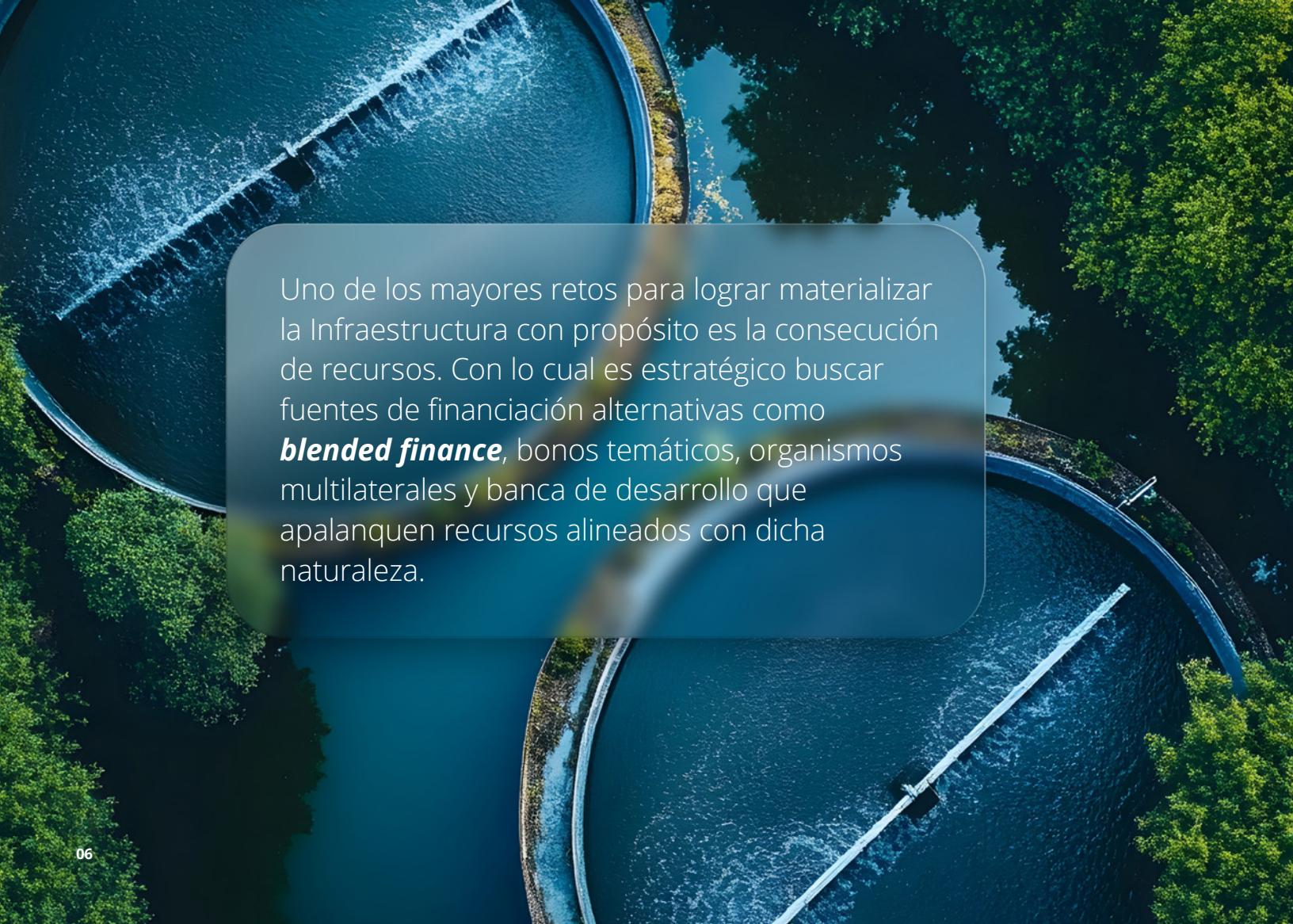
Otra evolución es combinar distintas fuentes de recursos en esquemas híbridos. El **blended finance** mezcla fondos públicos, inversión privada y, a veces, capital filantrópico o de cooperantes con el objetivo de hacer viables proyectos con impacto social/ambiental que, de otra forma, no atraerían suficiente inversión privada por sí solos. Por ejemplo, en energías renovables rurales o sistemas de agua en comunidades vulnerables, los gobiernos o bancos multilaterales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial— colocan una porción de capital semilla o garantías, reduciendo riesgo para que capital privado de impacto entre con el resto. Esto ha dado frutos en proyectos de electrificación rural con paneles solares, donde subsidios públicos iniciales se combinan con microfinanzas privadas para asegurar la sostenibilidad operativa.

En tanto, el mercado de capitales se ha alineado con la infraestructura sostenible a través de **bonos temáticos**: los **bonos verdes** financian proyectos ambientales (energía limpia, transporte limpio, reforestación), los **bonos sociales** apoyan proyectos con impacto social (vivienda asequible, hospitales, agua potable), los **bonos sostenibles** combinan características de los verdes y sociales, así como los **bonos de transición climática** ligados al cumplimiento del Acuerdo de París y atados a la consecución de objetivos (*Sustainability-Linked Bonds*). Latinoamérica se ha subido a esta ola: países como Chile y México han emitido bonos verdes soberanos de forma exitosa, y empresas de energía y transporte en la región también han colocado bonos sustentables en mercados internacionales.

Asimismo, los **organismos multilaterales** y **banca de desarrollo** locales continúan siendo aliados clave. El BID, el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el Banco Mundial y otros particularmente especializados en dichas organizaciones —como el BID Invest, IFC o el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)—, además de otorgar préstamos en condiciones favorables, aportan asistencia técnica para estructurar proyectos complejos. Su rol ha evolucionado hacia el de “catalizadores”: por cada dólar que prestan, buscan atraer varios dólares privados. Por ejemplo, a través de esquemas de cofinanciamiento, garantías parciales contra riesgo regulatorio o político, o fideicomisos de inversión que mezclan fuentes. Un caso destacado es la utilización de seguros contra riesgos climáticos para proteger proyectos de infraestructura, lo que reduce el riesgo y mejora la bancabilidad ante inversores privados.

Un componente crucial es la **transparencia**. Plataformas de datos abiertos y observatorios ciudadanos permiten hacer seguimiento al uso de fondos en proyectos, aumentando la confianza de todos los inversionistas. También se están incluyendo condiciones de “cláusula social” en los contratos de financiamiento; por ejemplo, compromisos de consultar a comunidades indígenas o de contratar Pymes locales como proveedoras, cumplimiento que es supervisado tanto por inversionistas como por la sociedad civil. Esto demuestra cómo el modelo de negocio *“for Good”* no solo cuestiona de dónde viene el dinero, sino de cómo se implementa el proyecto con gobernanza.

En resumidas cuentas, el cierre de la brecha de infraestructura en Latinoamérica depende de movilizar todas las fuentes de financiamiento disponibles bajo modelos innovadores. Ya no se trata de que el Estado lo haga todo, sino de armar el rompecabezas: APP bien estructuradas, recursos públicos inteligentemente utilizados para apalancar capital privado, mercados de bonos atrayendo inversión global y mecanismos ingeniosos para repartir riesgos. Los ejemplos exitosos en la región muestran que es posible escalar el impacto —llevar servicios a más gente, más rápido y de forma sostenible— si se combina la creatividad financiera con el propósito social y ambiental.



Uno de los mayores retos para lograr materializar la Infraestructura con propósito es la consecución de recursos. Con lo cual es estratégico buscar fuentes de financiación alternativas como **blended finance**, bonos temáticos, organismos multilaterales y banca de desarrollo que apalanquen recursos alineados con dicha naturaleza.

GOBERNANZA EFICIENTE QUE IMPULSA INFRAESTRUCTURA CON PROPÓSITO

La importancia de la institucionalidad “*for Good*”: construir infraestructura con propósito también es cuestión de buen gobierno y marco institucional. La gobernanza adecuada puede ser la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que no cumple su promesa; por ello, hay gobiernos en Latinoamérica que han reforzado leyes, políticas e instituciones para asegurar que la nueva infraestructura sea resiliente, sostenible y realmente genere el bien común:

- Marcos regulatorios propicios.**

Muchos países han actualizado sus leyes de infraestructura y APP incorporando metas de sostenibilidad. En México y en Chile, por ejemplo, fueron aprobadas leyes de economía circular que obligan a considerar el reciclaje y la reutilización de materiales en obras públicas, además de promover que los proyectos minimicen desechos. Asimismo, distintos gobiernos han integrado criterios de eficiencia energética y bajo carbono en sus códigos de construcción y normativa de obras. Además, se promulgan planes nacionales y lineamientos de infraestructura sostenible —como los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV) para Colombia— que establecen prioridades claras alineadas con los ODS.

- Transparencia y rendición de cuentas.**

La lucha contra la corrupción y la mala gestión es parte esencial de la gobernanza “*for Good*”. En Latinoamérica, particularmente en países como Colombia y Perú, han surgido observatorios de infraestructura en los que sociedad civil, academia y sector público monitorean la ejecución

de proyectos clave: plazos, costos y cumplimiento de estándares. Asimismo, hay naciones que han adoptado la iniciativa de Contrataciones Abiertas (*Open Contracting*), publicando datos de licitaciones y contratos de infraestructura en plataformas accesibles al público.

- Rol de la gobernanza.** Una sólida gobernanza atiende varios frentes: una correcta atribución de funciones y competencias institucionales, planificación estratégica de largo plazo, asignación eficiente de recursos, gestión de riesgos adecuada y mecanismos de evaluación y ajuste. Por ejemplo, Brasil ha creado comités interministeriales de infraestructura resiliente para coordinar transporte, energía, agua y vivienda bajo una sola visión estratégica, evitando esfuerzos aislados.

Hay que señalar que organismos como la ONU, OCDE y los bancos multilaterales han emitido guías y recomendaciones que Latinoamérica está siguiendo. Por ejemplo, la OCDE recomienda integrar un “Chequeo de sostenibilidad” en cada etapa de un proyecto, y países como Costa Rica están comenzando a implementarlo de manera formal. Por su parte, el BID sugiere utilizar el marco de las cinco dimensiones de infraestructura sostenible (económica, institucional, social, ambiental, y de resiliencia), auditando proyectos contra esas dimensiones. También se promueve la evaluación después de la conclusión del proyecto; es decir, medir si efectivamente alcanzó los beneficios sociales y ambientales previstos, con el fin de aprender de las lecciones.

Gobernanza, resiliencia y sostenibilidad son inseparables en la infraestructura “*for Good*”. La mejor financiación o tecnología va a fallar si no hay instituciones eficientes y transparencia; un proyecto solo es exitoso si se mantiene funcional ante los retos futuros y si mejora la vida de las personas sin comprometer el ambiente. Latinoamérica está dando pasos firmes en construir ese andamiaje institucional: desde leyes y políticas de vanguardia hasta observatorios ciudadanos. Afianzar esta gobernanza será clave para que la infraestructura con propósito perdure y realmente cumpla su promesa de transformar la región.



CASOS DE ÉXITO Y PILARES REGIONALES

Si bien existen desafíos, Latinoamérica cuenta con casos alentadores que demuestran que sí es posible hacer infraestructura para el bien común. A continuación, destacamos cinco pilares en diferentes países/regiones, cada uno ejemplificando un aspecto clave de la infraestructura *for Good*, acompañados de ejemplos emblemáticos:



Colombia: movilidad urbana sostenible

Colombia destaca en materia de transporte público sostenible. Bogotá revolucionó el concepto de *BRT* (*Bus Rapid Transit*) con su sistema TransMilenio, el cual, inspiró a otras ciudades del mundo y sigue expandiéndose con camiones de bajas emisiones.

Recientemente, la capital de ese país adjudicó su Primera Línea de Metro y ha implementado una de las mayores flotas de autobuses eléctricos de Latinoamérica en su sistema integrado. Medellín, por su parte, innovó con el MetroCable, teleféricos que conectan barrios antes marginados en ladera, integrándolos al Metro y transformando la vida de esas comunidades. **¿Qué hace bien Colombia?:** integración de sistemas (*BRT + Metro + cables + bicicletas compartidas*), financiamiento mixto y enfoque en inclusión social (llevar transporte a zonas pobres con tarifas asequibles).



Chile: transición energética verde

Chile se ha posicionado como líder en energías renovables. Gracias a políticas claras y abundantes recursos solares y eólicos, el país logró que en 2021 más de 20% de su matriz eléctrica provenga de fuentes no convencionales renovables, con una meta de 70% al 2030.⁹ Proyectos emblemáticos incluyen el parque solar Atacama y parques eólicos en la Patagonia. Además, Chile impulsa el hidrógeno verde para usar sus renovables en descarbonizar industrias. **¿Qué hace bien el país?:** estabilidad regulatoria, incentivos a la inversión privada verde y planificación de redes de transmisión para integrar estas fuentes.



México: vivienda social sustentable

México ha sido pionero en vivienda de interés social a gran escala, con millones de créditos otorgados a través de instituciones como el Infonavit. En años recientes, el país ha incorporado criterios de sustentabilidad en este sector; por ejemplo, en la comunidad Vicentina de Oaxaca se construyeron viviendas sociales resilientes a sismos con materiales locales y participación comunitaria. **¿Qué hace bien México?:** escala —logró un alto volumen de construcción de vivienda accesible—, combinada con mejoras cualitativas en estándares, además de esquemas de financiamiento innovadores como bonos respaldados por hipotecas sociales. Lecciones: las políticas de vivienda deben contemplar la ubicación adecuada y la calidad constructiva.



Brasil: resiliencia hídrica y saneamiento

Brasil, con su tamaño continental, afronta retos tanto de escasez hídrica como de saneamiento insuficiente en zonas populares. En respuesta, el país sudamericano ha adoptado un enfoque robusto en resiliencia del agua. Después de la crisis de sequía de São Paulo en 2014, se aceleraron obras como la interconexión de cuencas y nuevos embalses para asegurar agua a la ciudad. A nivel nacional, Brasil aprobó en 2020 el Marco Legal de Saneamiento, que busca alcanzar 99% de acceso a agua potable y 90% a alcantarillado para 2033, abriendo el sector a la inversión privada. **¿Qué hace bien Brasil?:** enfrentar problemas estructurales con reformas valientes; combinar roles —el gobierno fija metas ambiciosas y regula, mientras el sector privado aporta inversión y eficiencia donde se le ha concesionado servicios. Lecciones: el agua es vida, invertir en infraestructura hídrica y saneamiento trae enormes beneficios en salud, educación y productividad.



Centroamérica: digitalización e inclusión tecnológica

En los países de Centroamérica, más pequeños y con menos recursos, uno de los pilares estratégicos ha sido impulsar la infraestructura digital para superar aislamiento geográfico y tamaño de mercado. Panamá se ha convertido en un *hub* digital regional: ha invertido en redes de fibra óptica troncales, albergando importantes *data centers* y puntos de interconexión de internet que sirven a toda la región.

Costa Rica, por su lado, desarrolla un ambicioso plan de transformación digital gubernamental y expansión de banda ancha rural para llevar internet a las zonas más

remotas. En el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras), proyectos de corredores de fibra óptica regionales y la adopción de gobierno electrónico están mejorando el clima de negocios y el acceso ciudadano a servicios sin necesidad de infraestructura física en cada localidad.

¿Qué hacen bien estos países centroamericanos?: apuestan por la conectividad como catalizador, pues reconocen que tener a su población conectada permite mejorar educación, facilitar comercio, telemedicina, etc. Incluso, se han visto iniciativas como zonas WiFi públicas en las ciudades, o la distribución de dispositivos en escuelas. Lecciones: la infraestructura digital tiene un amplio

retorno social y puede mitigar limitantes de escala; aún con recursos financieros limitados, alianzas público-privadas en telecomunicaciones y uso eficiente del espectro (por ejemplo, licitaciones 4G/5G con cobertura obligatoria) logran grandes avances. La inclusión digital es un pilar incuestionable de la infraestructura *“for Good”* en el siglo XXI.

Estos casos de éxito nos enseñan distintos factores comunes de éxito: visión a largo plazo de políticas públicas, involucramiento de la comunidad, colaboración público-privada, innovación adaptada al contexto local y, sobre todo, enfoque en el usuario final. En la siguiente tabla resumimos los pilares y los ejemplos:

Pilares regionales de infraestructura *for Good* y casos destacados

País/Región	Pilar <i>for Good</i>	Ejemplo emblemático	Factor de éxito clave
Chile	Transición energética verde.	Parque Solar Atacama, cierre de termoeléctricas.	Políticas estables e incentivos a renovables.
Colombia	Movilidad urbana sostenible.	TransMilenio Bogotá, Metro Medellín, camiones eléctricos.	Integración modal & enfoque social.
México	Vivienda social sustentable.	Créditos Infonavit con ecotecnologías, desarrollo urbano integral.	Escala de financiamiento & mejora de estándares.
Brasil	Resiliencia hídrica y saneamiento.	Interconexión hídrica Sao Paulo, nuevo Marco de Saneamiento 2020.	Reformas legales & participación privada eficiente.
Centroamérica	Digitalización e inclusión.	Panamá <i>hub digital</i> , banda ancha rural Costa Rica.	Alianzas público-privadas & visión regional.

Cada país o ciudad, desde su realidad, puede adaptar estas lecciones: no hay un enfoque único, pero la combinación de voluntad política, innovación y alianzas da resultados. Además, en muchos de estos casos Deloitte ha sido asesor y ha podido acompañar los procesos de estructuración y viabilidad —por ejemplo, en proyectos ferreos en México, El Salvador, Colombia y

Perú, aportando análisis técnicos y financieros para hacerlos realidad. Esto demuestra que cuando el sector público, privado y expertos técnicos trabajan de la mano, la infraestructura sostenible deja de ser un ideal para convertirse en obra concreta que transforma vidas.

CONCLUSIÓN Y UN LLAMADO A LA ACCIÓN

Latinoamérica se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede seguir por la vía inercial o puede dar un salto hacia el futuro apostando por infraestructura con propósito. Los análisis y tendencias que hemos revisado apuntan a una conclusión clara: invertir en infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva es la **estrategia más efectiva** para impulsar el crecimiento económico, la integración social y la adaptación climática de la región. En pocas palabras, es la vía para transformar su futuro.

De tomarse en serio esta apuesta, imaginemos por un momento a Latinoamérica en 20 años: ciudades con transporte limpio y accesible para todos; energía abundante y renovable alimentando industrias verdes; agua potable y saneamiento garantizados, incluso, en comunidades rurales; autopistas digitales que conectan a cada joven con oportunidades globales; y comunidades más seguras frente a desastres gracias a infraestructura diseñada con la naturaleza en mente. Se trata de un futuro alcanzable con las decisiones correctas desde el presente.

Es momento para que los líderes gubernamentales pongan la infraestructura *“for Good”* en la cima de la agenda. Esto implica priorizar proyectos con alto impacto social y ambiental en los presupuestos, fortalecer las instituciones que planifican y regulan, así como continuar las reformas en favor de la transparencia y la inversión sostenible. Cada ministerio de obras, planeación, transporte, energía, debe abrazar la innovación y la consulta ciudadana en sus proyectos. La coordinación regional también será clave: compartir

buenas prácticas entre países, articular esfuerzos transfronterizos y alzar una voz unida en foros internacionales para atraer financiamiento climático hacia nuestros países.

Por su parte, el sector privado tiene en sus manos la capacidad de multiplicar el impacto. Incorporar principios ASG en cada inversión y buscar esos proyectos de infraestructura sostenible que no solo generen retornos financieros, sino también legado social y medioambiental. Asimismo, los inversionistas locales pueden destinar más porcentaje de sus portafolios a infraestructura nacional bien estructurada, que hoy ofrece oportunidades estables y de largo plazo. La rentabilidad financiera y el desarrollo sostenible no están confrontados; por el contrario, como vimos, la infraestructura sostenible tiende a superar a la convencional en rendimiento bajo escenarios de transición climática. Apoyar estos proyectos es ganar-ganar: para sus negocios y para la sociedad.

El llamado para la sociedad civil y la academia es seguir siendo la conciencia y la guía. Acciones como participar activamente en consultas de proyectos, exigir rendición de cuentas y aportar innovaciones desde la investigación aseguran que *“for Good”* realmente signifique para el bien común. La infraestructura no es un tema técnico ajeno: afecta la vida cotidiana de todos y, por tanto, todos debemos involucrarnos en definir qué tipo de infraestructura queremos. Educar a la ciudadanía sobre los beneficios de, por ejemplo, un Metro vs. más autos, o de energía renovable vs. fósil, ayuda a crear demanda social por las opciones sostenibles.

Se trata de un llamado a la acción para todos los actores. La visión está clara y el camino trazado por tendencias y casos exitosos. Latinoamérica puede y debe tomar las riendas de su destino infraestructural, convirtiendo sus debilidades en oportunidades de cambio transformacional.

En Deloitte, creemos firmemente en este potencial y estamos comprometidos a ser un socio estratégico en cada paso del recorrido. Con nuestra experiencia global y regional en consultoría de infraestructura —desde planificación estratégica y estructuración técnica-financiera, hasta asesoría en levantamiento de capital, gestión de riesgos ASG y climáticos— estamos listos para ayudar a convertir las ideas en proyectos concretos. Hemos acompañado a gobiernos y a empresas en algunos de los proyectos más innovadores mencionados, por lo que conocemos de primera mano los desafíos y cómo superarlos.

La invitación es a sumar esfuerzos: gobiernos visionarios, empresas responsables, financieras innovadoras, comunidades empoderadas y aliados técnicos. Juntos podemos construir la Latinoamérica del mañana, donde la infraestructura sea sinónimo de prosperidad compartida y sostenibilidad. Cada nuevo kilómetro de carretera, cada kilovatio instalado, cada conexión de agua o internet que hagamos con propósito acercará a la región a ese futuro prometedor que merece.

REFERENCIAS

¹ Bhattacharya, A. (2023). "El desafío de la infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe y el papel de los bancos multilaterales de desarrollo". Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/El-desafio-de-la-infraestructura-sostenible-en-America-Latina-y-el-Caribe-y-el-papel-de-los-bancos-multilaterales-de-desarrollo.pdf>

² UNOPS. "Infraestructura inclusiva para la acción climática". 2022. https://content.unops.org/publications/Inclusive-infrastructure_ES.pdf

³ Deseglise, C. Et al. (2025). "Why investment in sustainable infrastructure is key to financial resilience in a changing climate". Foro Económico Mundial. www.weforum.org/stories/2025/04/why-investment-in-sustainable-infrastructure-is-key-to-financial-resilience-in-a-changing-climate/

⁴ The Economist, Duke University, Deloitte. (2023). "Infrastructure for Good. Building for a better world". https://impact.economist.com/projects/infrastructure-for-good/TEI_Deloitte_Infrastructure_for_Good_Key_Findings_Report.pdf

⁵ Deseglise, C. Et al. (2025). "Why investment in sustainable infrastructure is key to financial resilience in a changing climate". Foro Económico Mundial. www.weforum.org/stories/2025/04/why-investment-in-sustainable-infrastructure-is-key-to-financial-resilience-in-a-changing-climate/

⁶ Home. (2025). C40 Cities Climate Leadership Group. www.c40.org/es/

⁷ Home. "Climate and Clean Air Coalition (CCAC)". 2025. <https://www.ccacoalition.org/es/>

⁸ Deseglise, C. Et al. (2025). "Why investment in sustainable infrastructure is key to financial resilience in a changing climate". Foro Económico Mundial. www.weforum.org/stories/2025/04/why-investment-in-sustainable-infrastructure-is-key-to-financial-resilience-in-a-changing-climate/

⁹ ACERA. (2025). "Por un Chile 100% renovable". Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento AG. <https://cdn.acera.cl/wp-content/uploads/2025/10/2025-09-Boletin-Estadisticas-ACERA.pdf>

Contacto

Ricardo Flores

Socio Líder de Infraestructura & Real Estate

Deloitte Spanish Latin America
ricflores@deloittemx.com

Centro de contacto

+52 55 5080 6633

centrodecontacto@deloittemx.com

Gema Sacristan

Socia Líder de Sostenibilidad y Cambio Climático

Deloitte Spanish Latin America
gsacristan@deloittemx.com



Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obtener más información.

Deloitte ofrece servicios profesionales líderes a casi el 90% de las empresas de la lista Fortune Global 500® y a miles de empresas privadas. Nuestra gente ofrece resultados medibles y duraderos que ayudan a reforzar la confianza del público en los mercados de capitales y permiten que los clientes se transformen y prosperen. Sobre la base de sus 180 años de historia, Deloitte abarca más de 150 países y territorios. Descubra cómo las aproximadamente 470,000 personas de Deloitte en todo el mundo tienen un impacto importante en www.deloitte.com.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte S-LATAM, S.C." es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades legalmente separadas e independientes, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera y otros servicios profesionales bajo el nombre de "Deloitte". "Deloitte S-LATAM, S.C." no brinda servicios a los clientes. Consulte <http://www.deloitte.com/conozcanos> para obtener más información

Esta comunicación y cualquier archivo adjunto en esta es para su distribución interna entre el personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus Entidades Relacionadas (colectivamente, la "organización Deloitte"). Puede contener información confidencial y está destinada únicamente para el uso de la persona o entidad a la que va dirigida. Si usted no es el destinatario previsto, notifíquenos de inmediato, no utilice esta comunicación de ninguna manera y luego elimínela junto con todas las copias de esta en su sistema.

Ni DTTL, sus firmas miembro, Entidades Relacionadas, empleados o agentes será responsable de cualquier pérdida o daño alguno que surja directa o indirectamente en relación con cualquier persona que confie en esta comunicación. DTTL y cada una de sus firmas miembro y sus entidades relacionadas, son entidades legalmente separadas e independientes.